

La Junta investiga a Acali tras la denuncia de irregularidades

RAFAEL A. AGUILAR

CÓRDOBA. La Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación sobre la Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados (Acali) tras recibir una denuncia de irregularidades en su seno, formulada por un grupo de pacientes. Acali es una entidad que actúa mediante un concierto con la Junta. La queja, firmada por Antonio Mazán Larnia, llegó a las dependencias de la Administración autonómica el pasado 12 de marzo, y en ella se exponía que el presidente de la asociación, José Manuel López Peña, había sustituido al equipo técnico, compuesto por médicos y psicólogos, sin avisar a los enfermos.

Esta decisión no sentó bien a la comunidad terapéutica, de modo que parte de ella se manifestó el 9 de marzo en el acceso a Acali con pancartas a favor de los profesionales cesados. Según Antonio Mazán, la protesta pacífica derivó en un altercado con otro grupo de pacientes.

«El desenlace -asegura Mazán- fue el de un señor mayor violentado y arrastrado por el suelo, brillos de acero de algún descerebrado, graves amenazas, enfermos atendidos en Urgencias, cruces de denuncias en comisaría y la Policía Nacional tomando el barrio».

Como consecuencia de la disputa, el presidente de Acali prohibió a los manifestantes «poner los pies en las instalaciones y defendió a quien nos atacó con una navaja», tal y como se detalla en el escrito que Antonio Mazán ha dirigido a la Junta de Andalucía.

La concentración se debió a que, explica el denunciante, «como consecuencia de la sustitución del equipo técnico, los enfermos han estado desatendidos». «Los médicos utilizan productos que evitan que los enfermos tengan contacto con el alcohol o que quitan el deseo de consumirlo, y no es difícil imaginar las consecuencias que en ellos ha tenido tan desgraciada e irresponsable decisión», añade Mazán.

Ambiente enconado

A raíz del despido de los médicos y psicólogos la situación en Acali se ha enconado, de manera que las acusaciones han subido de tono. Tanto es así que los denunciantes, que han logrado casi cien firmas de apoyo, sospechan de la transparencia de su gestión económica. «Los ingresos anuales de Acali [por aportaciones de las instituciones públicas y privadas] superan los 77 millones de las antiguas pesetas y los gastos son de 16: la diferencia a favor de la asociación es de 61 millones». «¿Qué se hace con esos fondos? ¿Existe un libro de contabilidad?», se preguntan quienes han pedido a Bienestar Social que investigue.

Las acusaciones tienen nombre y apellidos, pues el grupo de pacientes que encabeza Mazán subraya que el gerente de Acali es el yerno del presidente y que su hija ejerce como psicóloga en la entidad. La sospecha es que esos puestos se hayan conseguido mediante un trato de favor discriminatorio.

Por su parte, José Manuel López declaró ayer a ABC que «las personas que han denunciado no son socias de Acali», al tiempo que defendió la calidad del trato a los enfermos. La Junta de Andalucía, que ya ha realizado la inspección, redacta ahora el prescriptivo informe.

ABC